

C.A. de Valdivia

Valdivia, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente que:

Primero. Manuel Alberto Silva Estrada, empleado, domiciliado en la comuna de Valdivia, recurre de protección en contra de la **Superintendencia de Seguridad Social**, la **Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos** y la **Isapre Más Vida**, quienes, al haber rechazado dos licencias médicas extendidas por veintiún días a contar del 24 de mayo de 2024 y catorce días a contar del entre el 8 de julio de 2024, habrían incurrido en actos ilegales y arbitrarios que vulneran sus garantías de derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y propiedad, contenidas, respectivamente, en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 la Constitución Política de la República.

Sostiene que las referidas licencias médicas fueron sido rechazadas por motivos genéricos, sin mayor fundamentación y contra las indicaciones de su médico tratante, el doctor Mauricio Autonell Arancibia, psiquiatra, quien le otorgó reposo para el tratamiento de depresión mayor, trastorno de pánico y estrés, diagnosticados en marzo de 2024, indicando tratamiento farmacológico y psicoterapia, junto con licencias médicas, dada la incapacidad que su enfermedad conlleva.

Segundo. Informando, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos, señala que las licencias fueron rechazadas porque el recurrente completó sesenta y nueve días de reposo y en los informes médicos acompañados no se aportaron antecedentes que justificaran la prórroga de la incapacidad laboral con posterioridad al 23 de abril de 2024, fecha señalada en el informe elaborado por la profesional psiquiatra de la Isapre Más Vida.

Tercero. La Superintendencia de Seguridad Social, por su parte, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

En subsidio, señala que, en el caso del recurrente, se limitó a resolver con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria y agrega que, en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZMDXRHHXND

expediente administrativo, existen antecedentes médicos que justificaron el rechazo, entre ellos el informe del facultativo de la Superintendencia, doctor Lucas Gutiérrez, quien señala en su informe que: “Fundamentos de la resolución: Elementos relevantes del contexto. Ocupación: Profesor. Diagnóstico Principal: Trastorno de pánico con agorafobia. Reposo indicado por médico psiquiatra. Tiempo de reposo reclamado por 55 días. Reposo previo autorizado por 69 días. Continúa con 7 días de reposo posterior a las lms reclamadas Solo presenta resolución COMPIN para una de las lms reclamadas. Fundamentos clínicos: Informes adjuntos describen sdr ansioso asociado a crisis de pánico, que interrumpe posibilidad de retorno laboral. No dan cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional significativo. Se describe adecuada respuesta inicial y exacerbación frente a la exposición. Tratamiento de primera línea a dosis adecuadas. Si bien se menciona psicoterapia como parte del tratamiento no se adjuntan certificados del proceso. En suma, no se pueden desprender elementos de severidad, compromiso funcional significativo ni refractariedad a tratamiento con los documentos adjuntos. Además, peritaje propone que se encuentra en condiciones de retorno laboral. Por lo tanto, sugiero no acoger lm 18259829-1. Con respecto al resto, no me pronuncio ya que no cuentan con resolución COMPIN”.

Agrega que, debido al extenso reposo del recurrente, se realizó un peritaje de segunda opinión, el 16 de abril de 2024, suscrito por la doctora Valentina Plaza Stuardo, que señala: “Conclusión: En tratamiento médico desde el 19 de marzo 2024, con licencia desde el 19 de marzo 2024 hasta el 18 de abril 2024. Última licencia dada por psiquiatra. En tratamiento con medicamentos y psicoterapia, respuesta parcialmente favorable. Dados sus antecedentes, se estima que la persona evaluada presenta síntomas moderados y no está apta para trabajar. Se sugiere continuar controles con psiquiatra, mantener psicoterapia. Ajustar dosis de clonazepam. Por sus antecedentes, se considera que no corresponde a patología laboral. Patología común recuperable. Notificación GES: no corresponde. Periodo de reposo justificado. Apto para trabajar desde el 23 de abril 2024”.

Sostiene que la valoración de los antecedentes acompañados por la recurrida permite descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad, pues



demuestra que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho.

Afirma que no existe un derecho indubitado del recurrente que pueda cautelarse por esta vía y manifiesta que no se han conculcado las garantías constitucionales del recurrente.

Cuarto. Por último, al informar la recurrida Isapre Nueva Más Vida solicitó la desestimación del recurso, fundada en que, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, se solicitó al recurrente concurrir a un peritaje médico, a raíz de una licencia médica anterior, con fecha 16 de abril de 2024, el que fue realizado por la doctora Valentina Plaza Stuardo, especialista en psiquiatría, el cual concluye que: “Periodo de reposo justificado. Apto para trabajar desde el 23 de abril 2024”.

En consecuencia, no se justifican las licencias médicas emitidas con fecha de inicio de reposo el 24 de mayo y 8 de julio de 2024, respectivamente, por encontrarse el recurrente en condiciones de reintegro laboral desde el 23 de abril de 2024, según da cuenta la pericia señalada.

Niega haber incurrido en actos ilegales o arbitrarios que pudieren haber vulnerado las garantías constitucionales del recurrente.

Quinto. En cuanto a la alegación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien pide que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección por ser este improcedente en materias de seguridad social, esta será rechazada pues, de la lectura del libelo, se aprecia que en este se ha solicitado la cautela de las garantías de derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, contenidas, respectivamente, en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, todas contempladas en el ámbito de la acción de protección, de conformidad al artículo 20 del texto constitucional.

Sexto. En cuanto al fondo de la acción deducida, de la lectura del expediente administrativo agregado a este procedimiento, queda de manifiesto que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió en razón del informe de su propio facultativo -quien se limitó a analizar los informes del médico tratante- y del peritaje realizado por una médica psiquiatra, el que ha sido aportado en parte de prueba en sede administrativa por la propia



ISAPRE que ha rechazado las licencias médicas cuestionadas, peritaje que sirvió, a su vez, de base para lo resuelto por COMPIN .

De este modo, entonces, los fundamentos indicados por los órganos reclamados quedan limitados a hacerse parte del dictamen de ciertos médicos que se contraponen al de otros profesionales, sin explicar por qué adoptan esta decisión, o cuál es la razón de peso por la que se otorga mayor valor a lo señalado por los facultativos de la Isapre y la Superintendencia que el que se da a lo informado por el médico tratante del recurrente, análisis parcial que no confiere suficiente basamento a la determinación adoptada.

Por lo expuesto, la motivación consecuente al rechazo del exceso de días otorgados de licencia y la falta de mayores antecedentes aportados no pueden dar sustento adecuado al acto administrativo reclamado, razón por lo que resulta carente de fundamentación, en los términos del artículo 41 de la Ley N°19880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Séptimo. En lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N°25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles” (C.S. Roles N°s 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).



Octavo. Debe tenerse en cuenta, además, que el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional (Decreto Supremo N°3, de 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud), en su artículo 21, establece que, para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a), lo que, en este caso, ni la COMPIN ni la Superintendencia de Seguridad Social hicieron, asunto que en este caso revestía de particular importancia, tomando consideración que el informe de la doctora psiquiatra contratada por la Isapre recurrida se realizó en el contexto de la aprobación de una licencia médica anterior y se limita a evaluar que el reposo estuvo justificado hasta el 23 de abril de 2024, sin referirse a las prórrogas posteriores que, obviamente, no pudo conocer.

Noveno. Así las cosas, y en las particulares circunstancias descritas, el actuar de la COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social, por la ausencia de un real fundamento de su decisión deviene en ilegal y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, no se dispuso la utilización de la aludida herramienta objetiva e imparcial regulada en el artículo 21 del citado Reglamento.

Además, este actuar ilegal y arbitrario vulnera el derecho de propiedad del actor, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas importa la privación a un derecho a retribución monetaria, contemplado expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad, por lo que la acción de protección debe ser acogida.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se **RECHAZA** la alegación de inadmisibilidad del recurso, opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

Se **ACOGE**, sin costas, el recurso de protección deducido por Manuel Alberto Silva Estrada en contra de la de la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Ríos y la Isapre Más Vida, dejando sin efecto el rechazo de las licencias médicas otorgadas al actor números 4-18259829 y 4-18677690, extendidas



por veintiún días a contar del 24 de mayo de 2024 y catorce días a contar del entre el 8 de julio de 2024, y decidiendo, en su lugar, que la recurrida Isapre Nueva Más Vida deberá disponer el inmediato pago de las licencias médicas.

Acordada contra el voto del ministro señor Samuel Muñoz Weisz, quien estuvo por rechazar el recurso, atendido que, de la lectura del expediente administrativo agregado a este procedimiento, queda en evidencia que las recurridas estudiaron los antecedentes y con su mérito concluyeron que no se encontraba justificada la incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, que alcanzó a 69 días por la misma patología, por lo que no se aprecia en la especie la existencia de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de las recurridas que vulnere, perturbe o amenace las garantías constitucionales del recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2702-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZMDXRHHXND

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Samuel David Muñoz W., Maria Soledad Piñeiro F., Rodrigo Ignacio Schnettler C. Valdivia, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Valdivia, a dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZMDXRHHXND